

Según cifras del Minsal, en 2023 hubo 7.184 casos,, mientras que en 2021 fueron 2.343:

Agresiones a funcionarios de salud se triplicaron en los últimos dos años

Cada vez son más los recintos hospitalarios que adoptan medidas para resguardar la integridad del personal, como blindar puertas y murallas y reforzar la seguridad de las ambulancias.

MARIANNE MATHIEU

La crisis de seguridad que se ha agudizado estos últimos años ha traído consecuencias no solo para el común de la población, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria.

Según datos del Ministerio de Salud entregados por Ley de Transparencia, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios de salud del país. Un fuerte incremento si se compara con 2022, cuando fueron 6.156. De hecho, las cifras de 2023 son tres veces más que lo sucedido en 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos.

Pero los funcionarios no solo han visto un aumento en las agresiones hacia ellos, sino que también en los ataques a sus recintos y sus equipos, por lo que han tenido que adoptar medidas de seguridad por su cuenta.

Gabriela Flores, presidenta de la Confusam, gremio que agrupa a los trabajadores de la atención primaria de salud y que estuvo en paro, entre otras razones, por el aumento de la violencia y las agresiones al sector, dice que "todos los días, en algún lugar del país, golpean a un trabajador, destruyen nuestras fuentes laborales, atacan los vehículos que transportan a los compañeros y usuarios, rompen los parabrisas, lunetas, nos roban los carros (...). Tenemos la Ley de Consultorio Seguro, pero que no se aplica como debe, porque Carabineros llega después de dos horas de que agreden a alguien".

Una de las regiones donde más ha aumentado la inseguridad del personal es en La Araucanía, debido a los constantes ataques incendiarios que se vi-



RESGUARDO .—Los funcionarios de Alto Hospicio cumplen cerca de un año y medio utilizando cascos y chalecos antibalas cuando realizan rondas médicas en ambulancias.

AGRESIONES

En La Araucanía han debido blindar las ambulancias que realizan rondas médicas.

ven en la región.

Carlos Rojas, presidente de la Confusam de la zona, dice que si bien han descartado medidas más extremas que se les han ofrecido, como utilizar chalecos antibala y cascos, han estado implementando medidas como que el cierre de atención de la posta a las 17:00 horas y no a las 20:00 horas, como era habitual. Y cuando hay algún ataque o ame-

naza también hay un operativo para suspender las rondas en la zona.

Incluso, ahora están reforzando las ambulancias: "Hemos tenido situaciones donde los funcionarios han tenido que agacharse, tirarse al suelo, cuando llegan a tener conflictos entre las comunidades mapuche y Carabineros que se dan ahí mismo. (...) En las ambulancias se ha trabajado y avanzado en, por lo menos, ponerle láminas de seguridad a los vidrios. Y también se quiere hacer después un blindaje", dice Rojas.

Similar es la situación que viven en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá, donde desde que comenzó la ola

migratoria han tenido que adoptar medidas extremas y por ejemplo, algunos de los trabajadores de la atención primaria que se movilizan en ambulancia y tienen que asistir a lugares conflictivos, como tomas y campamentos, atienden con cascos de guerra y chalecos antibala.

Víctor Vega, jefe de los servicios de urgencias de las APS de la zona, dice que con la llegada masiva de migrantes a la región proliferaron las tomas de terrenos y cambió la gravedad de la delincuencia y que incluso han visto personas con metralletas, y que a raíz de ello se tomó la decisión.

Sin embargo, luego de más de año de implementada la medida, Vega asegura que "es una falsa seguridad claramente. No determina que esté algo seguro, estamos normalizando lo anormal. Ahora, también se han generado otras medidas; aumento de cámaras de seguridad para cualquier tipo de agresión, por ejemplo, porque igual los pacientes, al haber un aumento de la demanda asistencial, se ponen agresivos. Hemos tenido agresiones de gran magnitud".

Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales, comenta que los municipios y los servicios de salud deben implementar disposiciones adicionales: "Debiera haber vigilancia permanente, a través de Carabineros o vigilantes privados en los Cefsam de una vez por todas. La misma corporación municipal que tiene seguridad, que ponga guardias en los centros de salud, y que sea el testigo para aquellos que cometen delitos de violentar a los funcionarios de la salud".

GEDIDA